

IRENE ABAD BUIL

Tras la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) y el intento de restauración monárquica, la situación política española había caído progresivamente en una decadencia tal que tuvo como consecuencia inmediata un enorme descontento popular decidido a acabar con la monarquía y a defender un nuevo sistema político basado en la República. Para acallar dicho descontento y que el pueblo pudiera manifestarse, el gobierno convocó elecciones municipales para abril de 1931.

Las candidaturas republicanas triunfaron en prácticamente todas las capitales de provincia españolas y esto condujo a la proclamación oficial de la República el 14 de abril de 1931, una vez que Alfonso XIII optase por el exilio.

La instauración de la República supuso el establecimiento de un nuevo sistema de partidos políticos y el desarrollo de organizaciones sociales, dentro de las cuales adquirirían una notable importancia los sindicatos de clase que respondían, básicamente, a dos programas ideológicos. Por un lado, el sindicalismo de ideología socialista o Unión General de Trabajadores (UGT) y, por el otro, el sindicalismo apolítico o Confederación Nacional de Trabajo (CNT). Siguiendo estas premisas hay que decir que en la comarca del Sobrarbe no se constituyó ninguna organización local de carácter ugetista, sin embargo sí las hubo de tipo cenetista, destacando dos dentro del partido judicial de Boltaña, cuya existencia se prolongó desde 1931 hasta 1936, llegando a contar, entre ambas, con un total de 260 afiliados.

Las elecciones de febrero de 1936 iban a ser el comienzo del fin de la tan inestable II República. Habían quedado atrás dos años de República izquierdista (desde noviembre de 1931 hasta septiembre de 1933), basados en el reformismo de las precedentes estructuras monárquicas y dictatoriales a partir de numerosos cambios en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, y llenos de enfrentamientos con el poder eclesiástico. Les sucedieron otros dos años de República de derechas, como consecuencia de la victoria de la CEDA en las elecciones del 33, tratando de establecer las pautas del moderantismo.

A pesar de esa segunda etapa republicana bajo la influencia de la CEDA destinada a variar los significados democráticos, los comités revolucionarios siguieron existiendo. Ese fue el caso del Comité Comarcal de Aínsa que, aunque con sede en dicho municipio, aglutinaba a miembros de numerosos pueblos de alrededor, los cuales defendían tanto una ideología cenetista como ugetista. Este comité va a tener como objetivo primordial la colectividad agraria. Así, algunos pueblos del Sobrarbe quedaron agrupados en una organización comarcal, en la que Aínsa, como cabecera, adquiriría la responsabilidad de servir de enlace para la transmisión de información entre los pueblos y la Federación Regional de Colectividades, del establecimiento de normas de organización y de otros cometidos relacionados con la productividad agrícola. Cuando en abril de 1938 el poder municipal pasó a manos de los sublevados, se le atribuyó a este Comité el asesinato del contratista de las obras de Mediano y de algunos sacerdotes de la zona, al igual que se les culpó de la quema de títulos de propiedad. Otro comité de semejantes características era el existente en Torla, al que se le consideró el máximo responsable de que el Comité Comarcal de Aínsa llevase a cabo diversas represalias y persecuciones que culminaron en el asesinato de varios vecinos.

En febrero de 1936, en un intento por reunificar las ideologías republicanas de tendencia izquierdista, el Frente Popular ganaba en algunos municipios del Sobrarbe (Bielsa, Gistaín, los pueblos pertenecientes al ayuntamiento Tella-Sin, Pueyo de Aragüás, Labuerda, aldeas de La Fueva ubicadas en la falda de Sierra Ferrera y Fiscal) y los comités, con pretensiones fundamentalmente agrarias pero con clara influencia en lo político, encontraban una buena coyuntura para consolidarse. Poco duraría esta situación, pues el ambiente bélico que se comenzaba a respirar acabaría, a partir de abril de 1938, con todo lo que había supuesto la República para la comarca. La colectivización defendida por el comité revolucionario quedó sustituida por la privatización de bienes y el reparto convenido de los recursos públicos. El pleno apogeo que, desde 1935, vivió la central eléctrica de Lafortunada encontró una fuerte recesión de la que no se recuperaría hasta el comienzo de la dictadura de Franco. Las sucursales del Banco Aragonés de Crédito, en Boltaña, y la del Banco de Crédito de Zaragoza, en Aínsa, instaladas desde 1933, también sufrirían con la guerra una crisis que les costaría superar.

Comenzaban a perderse las libertades y mejoras que el sistema de la República ofrecía, se frenaba tajantemente el ritmo de creación intelectual que existía en España y, entre otras cosas, las mujeres veían cómo toda su lucha por la igualdad sufría un fuerte retroceso (habían logrado ampliar su espacio adentrándose en ámbitos que hasta entonces se consideraban plenamente masculinos, fundamentalmente en el derecho a voto, concedido en 1931 y puesto en práctica en 1933).

La mezcla de intereses enfrentados entre sublevados y republicanos y que había desembocado en una guerra civil supuso el rotundo final para un modo de vida y el comienzo de nuevas pautas sociopolíticas. En definitiva, se produjo el hun-

dimiento del Estado, como consecuencia del ambiente de rebelión creado por la sublevación militar y las consecuentes respuestas revolucionarias; muy diversas dependiendo de las circunstancias de cada uno de los espacios en guerra. De esta manera cada uno de los bandos se estaba posicionando dependiendo de objetivos concretos y canalizados por la necesidad de construcción de un determinado sistema. En el caso de las izquierdas se pretendió la búsqueda de unas estrategias de política unitaria como mejor mecanismo de defensa.

Conforme avanzaba la contienda, los efectos bélicos comenzaban a estar presentes en todos los ámbitos de la vida. No sólo desde la perspectiva de la mortandad, que alcanzó cifras desmesuradas, sino también desde la represión, la pobreza, el exilio y el rencor social. Al igual que quedó muy bien representado en la nueva distribución del mapa, pues la provincia de Huesca quedó estratégicamente dividida en dos: la zona oeste, ocupada por los ejércitos sublevados después de la victoria de las guarniciones de Jaca y Huesca, y la zona este, que todavía mantenía el sistema republicano por influencia de las milicias de Barbastro y el apoyo que recibían desde Cataluña (columnas como «Carlos Marx», «Ascaso», «Lenin», «Roja y negra» y «Aguiluchos»). Dentro de la resistente zona este estaban los partidos judiciales de Tamarite, Sariñena, Fraga, Barbastro, Benabarre y Boltaña.

Hasta abril de 1938 la comarca del Sobrarbe era partícipe de la convulsión político-social que se daba en el resto de España. Pero en marzo del 38 el general Sagardía llegaba con sus tropas a Boltaña y el 5 de abril, el mismo día que el general Franco concedía a la ciudad de Huesca los títulos de Heroica e Invicta por haber conseguido la derrota de los ejércitos republicanos, las tropas nacionales ocupaban Aínsa. A partir de ese momento la comarca iba a sufrir los cambios que en otros puntos de la península ya se habían producido, y los sublevados iban a intentar conseguir el control de la vida social. Para ello eliminarían los elementos del sistema republicano, para imponer sus propios condicionantes por medio de dos vías básicas: la represión y la «depuración social».

La represión encontró múltiples matices a lo largo de los tres años de conflicto y durante todo el régimen posterior. En los inicios de la sublevación quienes primero sufrieron las más duras represalias fueron los militares profesionales declarados republicanos, los líderes políticos y las personas civiles con gran importancia dentro de la intelectualidad española. A esto se sumaron las matanzas colectivas o bombardeos que a lo largo de toda la guerra llegaron a producirse y los ajusticiamientos o detenciones de líderes políticos y



Tropas de la 43 División Republicana en el Alto Aragón

sacerdotes: entre otros, mataron al cura de Banastón el día que lo encontraron escondido en una de las casas del pueblo, al igual que fusilaron a otro natural de Casa Santa Tecla (Banastón). Tres años de intensa lucha cuyo objetivo primordial se convirtió en derrotar al «otro», por eso queda constancia de que la represión estuvo protagonizada por los dos bandos que desarrollaron la guerra, con la única justificación de la supervivencia, por parte de los republicanos, y la victoria, por la de los sublevados. A partir del uno de abril de 1939, cuando estos últimos conseguían su objetivo, los ya considerados franquistas serían los únicos protagonistas de una represión o «guerra social», más larga e intensa, que sustituía a la antigua «guerra de armas».

Pero es preciso decir que durante los años de conflicto el fin básico fue destruir todos y cada uno de los símbolos de identidad del enemigo creando sendos discursos de guerra que, a su manera, exaltasen la unidad y negasen al «enemigo su calidad de español», la represión se manifestó no sólo sobre las personas sino también en los bienes patrimoniales: el puente medieval de Broto quedó totalmente destruido, el puente del río Ara en Aínsa fue bombardeado, los diversos retablos existentes en la iglesia de Aínsa fueron quemados, al igual que las imágenes de la iglesia de Gerbe y los de muchos pueblos de la zona, como en Banastón, en que un grupo de milicianos (los mismos que estuvieron alojados en la iglesia durante algunos meses, dejando diversas inscripciones en las paredes de la misma), junto a otros republicanos del pueblo, sacaron todas las imágenes a la plaza y allí las quemaron. Lo único que se salvó fue el cáliz, que fue celosamente guardado por una mano desconocida en un olvidado rincón de las antiguas escuelas. Y si no era esto, podía ocurrir que algún bombardeo destruyera toda la iglesia, tal como sucedió en el pueblo de Señes (en el Valle de Gistau).

Otra consecuencia social fue el establecimiento de una clara división terminológica entre «vencedores» y «vencidos», que se tradujo en numerosas rencillas, fundamentalmente a nivel vecinal, y que muchas de las cuales se prolongaron durante años.

La guerra fue también un decisivo punto de inflexión en numerosas tradiciones mantenidas en el Sobrarbe. De hecho no hay más que hablar con la gente que por aquel entonces contaba entre veinte y treinta años para que definan sus fiestas de diferente manera: con unos determinados actos propios de antes de la guerra y unas celebraciones que perdieron gran parte de su esencia cuando se volvieron a recuperar después de los años de posguerra, cuando quedaron prohibidas todas aquellas tradiciones que no tuviesen carácter sagrado. Existe una excepción en todo esto y se trata del Carnaval de Bielsa, el único de la provincia de Huesca que siguió celebrándose a pesar de las restricciones ideológicas del momento.

Otro factor se vería directamente afectado a lo largo de los tres años de conflicto, la economía. Según Alberto Sabio, «para algunos terratenientes de la zona, ganar la guerra y aplicar su particular *reforma agraria* fue todo uno», pues las diferencias de clase quedaron fuertemente acentuadas ya que, incluso en

Sobrarbe, donde las pequeñas propiedades y la agricultura de subsistencia habían caracterizado la economía agropecuaria, la hegemonía de las «casas más fuertes» quedó totalmente consolidada. De esto queda una aproximada constancia en los datos aparecidos acerca de las hectáreas en propiedad de todas las casas de los diversos pueblos de La Solana. Por ejemplo, en Burgasé, el pueblo más grande del valle, existió una clara diferencia entre las consideradas «casas buenas» y las de unas posibilidades mínimas. Unas fuertes confrontaciones económicas que estaban, en la mayoría de los casos, directamente relacionadas con las afeciones ideológicas de cada una de las familias y con la reforma agraria que en esos momentos de confusión se llevó a cabo. Existieron además numerosos casos de propiedades abandonadas como consecuencia del exilio o por falta de dueño a causa de muerte de guerra. Era entonces, cuando estas tierras pasaban a las manos de los adeptos al régimen, reformando totalmente los sistemas de propiedad y reafirmando económicamente las diferencias sociales.

Por otro lado destacó el constante interés franquista por aplacar todos los resquicios que del sistema anterior pudieran quedar para así imponer la moralidad nacionalcatólica en la que se basaba la nueva dictadura. El sistema que para ello utilizaron se centró en la depuración administrativa y social, establecida por la ideología y el grado de compromiso con el Movimiento (aumentaron los partes de «busca y captura», los fusilamientos, los expedientes por cualquier irregularidad de carácter cívico, las imposiciones económicas, políticas, sociales y morales, y el exilio) y en la renovación educativa, donde va a pasar a tener gran importancia la Iglesia, como guía de la moralidad española.

El cese de autoridades republicanas y el nombramiento de otras nuevas dio lugar a la creación de numerosas «comisiones gestoras» controladas por los poderes locales, apoyados, a su vez, por una fuerte jerarquía civil, militar y eclesiástica, pues era el gobernador civil o el gobernador militar de la provincia quien nombraba a los miembros del nuevo ayuntamiento. En el caso de Aínsa fue Alberto Ruiz Moriones, gobernador militar, el encargado de designar al alcalde y a los concejales y de presidir el primero de los plenos de esta corporación, en la que se decidía, como uno de los primeros objetivos básicos, el eliminar la Federación Comarcal de Colectividades, con sede en Aínsa y hasta entonces encargada de regular la economía rural de todo el Sobrarbe, bajo el nombre de Comité de Aínsa y constituido por personas de todos los pueblos de la zona, entre ellos el antiguo alcalde de Labuerda. El nuevo ayuntamiento elaboró una lista con los nombres de todos sus miembros y se les acusó de una serie de asesinatos a sacerdotes de la zona y de la quema de diversos títulos de propiedad. Abriéndoles dichos expedientes y siendo encarcelados, se conseguían dos objetivos pretendidos por el régimen: alejar de la sociedad española a aquellos que calificaban como «masones y comunistas» y, económicamente, restablecer el antiguo sistema de dominación capitalista superado por las precedentes reformas sociales de la clase obrera. Con esto el franquismo, aunque en otros aspectos marcase fuertes diferencias, trataba de equipararse a otros fascismos europeos.

Otra forma de apoderarse del control social fue el intentar incrementar lo más posible sus listas de simpatizantes. Para conseguir esto, los protagonistas de la sublevación comenzaron a lanzar iniciativas que tendrían su principal desarrollo durante la inmediata posguerra. Fue el caso del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, creado por Franco en enero de 1938 con el fin de reconstruir las ciudades y pueblos fuertemente afectados por la guerra, y que en el Sobrarbe desempeñaría su misión fundamentalmente en Bielsa, después del acantonamiento que la 43 División del Ejército Republicano protagonizó en dicho pueblo. Acontecimiento que pasó a las páginas de la historia bajo la denominación de «La Bolsa de Bielsa».

Bajo el mando de Antonio Beltrán, alias «El Esquinazau», el único reducto republicano que quedó en la provincia de Huesca, aislado y totalmente cercado por las tropas nacionales, encontró su final en Bielsa. Esta extrema situación duró dos meses de adelantos y retrocesos en el combate, de muertes tanto de militares como de civiles, de casas bombardeadas, de hambre y de un final inexorable: el exilio. Quizá por eso las intenciones franquistas por arreglar lo destruido para ganarse la confianza de las gentes de la zona no surtió el efecto esperado, porque se arreglaron los destrozos materiales que no habían sufrido excesivo daño y el pueblo recuperó, en parte, la estructura de antes, pero no se solucionaron las faltas humanas, ni las muertes ni las que para siempre se quedaron exiliados en otros países, principalmente en Francia.



Antonio Beltrán, el Esquinazau, nacido en Canfranc, fue el comandante en jefe de la 43 división

Es curioso ver como en algunos cementerios de la zona, como los de Sin, Saravillo o San Juan de Plan, aparecen lápidas cuyas fechas oscilan entre finales de los cincuenta en adelante. Además de los datos básicos están adornadas con numerosos recuerdos escritos en francés u objetos conmemorativos propios de la costumbre funeraria francesa. La interpretación de estas dedicatorias, fundamentalmente hechas de hijos a padres, nos conduce a pensar que los allí enterrados fueron personas que con el exilio republicano marcharon a Francia, donde decidieron seguir su vida y donde crecieron sus hijos (considerados propiamente franceses). En el país vecino murieron y sólo regresaron a España para ser enterrados en sus pueblos de origen.



Al terminar la guerra y durante los primeros años de posguerra existió un contrapunto a esta marcha masiva de gente: fue la población civil que no escogió el exilio como vía de escape y que, resignándose a la represión, a la falta de libertades y a la pobreza, decidió permanecer en el Sobrarbe teniendo en cuenta que la nueva etapa dictatorial iba a traer numerosos cambios, principalmente sufridos por el campesinado. Hubo cambios en la sociedad, en el sistema político y en el educativo. En una ocasión, allá por el año 40 o el 41, llegó un inspector del régimen a la escuela de Banastón y obligó a la maestra que regentaba la escuela a hacer una exposición ante sus alumnos para que él valorase su «calidad profesional». Ella consideró oportuno aplicar los métodos que durante todo el tiempo había seguido, aquellos que en la Escuela Normal de Maestras de Huesca le habían enseñado. Era una educación muy práctica y pendiente de la actualidad, así que basó dicha exposición en una muestra de la realidad española del momento a través de las fotos, extraídas de un periódico, de mujeres a las que como castigo se les había rapado la cabeza. El inspector no le dijo nada, pero en cuanto abandonó la escuela se dirigió al jefe de Falange del pueblo para pedirle un informe sobre la maestra. Éste la salvó de una posible detención al decirle que ella nunca se metía en política, que ese simplemente era su método de trabajo. Hasta qué punto el jefe de Falange la defendió no se puede llegar a determinar, pero hay que tener claro que en comunidades tan pequeñas como la mencionada, los lazos de solidaridad e identidad vecinal tenían mucho más peso que las confrontaciones ideológicas. Sin embargo no todos los maestros nacionales contaron con la misma suerte que la anteriormente aludida ya que muchos de ellos, por seguir sistemas educativos fraguados en la República, fueron fusilados, encarcelados u obligados a huir a través de los Pirineos.

La posguerra española también se convirtió en una época de importantes cambios económicos, traducidos principalmente por el estricto control regido por la Fiscalía Provincial de Tasas, institución creada con el objetivo de supervisar la economía agrícola de las zonas rurales. Pero para que la tarea de esta fiscalía quedase plenamente desempeñada, dependían de ella otras como la Comisión General de Abastecimientos y Transportes, encargada de controlar el almacenaje y la compra-venta de productos agrícolas, y el Servicio Nacional del Trigo cuya función descansaba en actuar como intermediario entre los productores individuales y las harineras con el fin de que no se produjesen fraudes. Si algún molinero del Sobrarbe resultaba sospechoso por moler más trigo del que tenía estipulado, enseguida pasaba a estar bajo vigilancia y si llegaba el caso de que acudía al molino algún vecino a altas horas de la noche con



Entrada de las tropas franquistas en Bielsa

la intención de comprar «bajo mano» aquel excedente de producción, automáticamente el molinero era detenido. Como consecuencia de este rígido control hubo campesinos de la zona que pasaron por comisaría, como les ocurrió a algunos vecinos de La Fueva y de Sarratillo, a quienes les castigaron con multas de diversa cuantía.

Pero la comarca todavía sufriría otro desajuste económico y social producido por la llegada de los maquis. Partidas de guerrilleros formadas por republicanos españoles que, tras haber luchado junto a las tropas francesas contra la invasión alemana durante la II Guerra Mundial, quedaron organizadas con el objetivo de pasar a España y derrocar a Franco y su régimen, para recuperar lo perdido y para que todos los exiliados pudiesen regresar a su país. Estos guerrilleros respondían a las consignas de Unión Nacional Española, una coalición de todas las fuerzas izquierdistas en el exilio organizadas por el Partido Comunista.

Al compás del intento de invasión del Valle de Arán, en octubre de 1944, recorrieron el Sobrarbe tres brigadas de maquis: la 21, la X y la 186. La primera de ellas se movió por todo el valle de La Fueva, al establecer su campamento base en el monte Campanuel, por toda esta zona se dedicó a celebrar numerosos mítines, con el fin de crear simpatizantes a su política de Unión Nacional, y protagonizó la conocida escaramuza de Morillo de Monclús contra las fuerzas del ejército llegadas desde Aínsa y Mediano. La Brigada X entró por el puerto de La Pez y se movió por Saravillo, Laspuña y posteriormente por el Valle de Vió. Por último, la Brigada 186 penetró en el Sobrarbe por Urdiceto y centró su actividad guerrillera por Gistaín, Serveto, Saravillo y Lafortunada.

La actividad de estas tres brigadas por la zona duró pocas semanas, pues al fracasar la invasión de Arán recibieron la orden de replegarse nuevamente hacia Francia. Sería el momento de cambiar la táctica: la «invasión», entrada masiva de guerrilleros que acabase inmediatamente con la dictadura apoyándose en un levantamiento popular, fue sustituida por la «infiltración», entrada clandestina de pequeños

grupos que se irían extendiendo por toda la península creando numerosos focos de lucha antifranquista. Pero para que los guerrilleros consiguiesen el tan pretendido apoyo del pueblo, en cada una de las partidas guerrilleras iba a ir un maqui que fuese oriundo de la zona en la que dicha partida iba a actuar, porque la atracción de colaboradores ya no iba a ser a través de mítines, sino que ahora había que hacerlo con la mayor cautela posible. Con un guerrillero de la zona, los maquis se garantizaban el apoyo, al menos, de familiares y amigos.



Foto tomada por Eugenio Monesma de Joaquín Arasanz «Villacampa», izquierda



Durante esta segunda etapa de lucha antifranquista, la cual comienza a partir de 1945, la actividad de los maquis quedó fundamentalmente aglutinada en la denominada Agrupación Guerrillera del Altoaragón, encabezada por Joaquín Arasanaz Raso, alias «Villacampa», de Castejón de Sobrarbe, y que anteriormente había estado por la zona dentro de la mencionada Brigada 21. Esta agrupación tenía como finalidad hacer desaparecer aquellos símbolos de identidad de los que ganaron la guerra, acabar con el sistema creado por Franco en torno a su persona y echar abajo toda la infraestructura económica y la base social que sostenía al Estado. Desde la clandestinidad, los guerrilleros, ubicados en las diversas cuevas de la falda de la Peña Montañesa, irían bajando a los pueblos de la zona, principalmente de noche, a represaliar a los delatores, a dejar anónimos en puertas de alcaldes o sacerdotes, a requerir la ayuda de sus enlaces o puntos de apoyo, o, simplemente, a pedir comida.

El de 1946 fue el año en el que los guerrilleros cometieron más actos violentos y se convirtió en el punto de arranque de una oleada de atracos, asesinatos, presiones y muertes, que llegó a durar algunos años más. El movimiento era totalmente clandestino y misterioso, capaz de llegar a cualquiera de los pueblos de la zona, de hecho sus actuaciones se van registrando en diversos puntos de la comarca sin encontrar una secuenciación lógica. Atracaron al recaudador de contribuciones de Guaso cuando recorría el tramo entre Bárcabo y Paúles, exactamente en el Puerto de Erípol. Le exigieron los recibos de la contribución y el dinero que llevaba, unas veinticinco mil pesetas; enviaron anónimos amenazantes a los alcaldes de Olsón y de Santa María de Buil; en el mes de septiembre las ferias de Aínsa y Boltaña se llenaban de propaganda comunista y, por citar algún ejemplo más, mataron al teniente alcalde de Arcusa.

Lo que todo esto conllevó fue una fuerte militarización de zona, representada por la Guardia Civil, el ejército, el Somatén y la Brigada Político-Social. Poco a poco los obstáculos con los que iban a contar los maquis eran mayores y, aunque en menor medida continuaron sus actividades (destacando principalmente la voladura de las tuberías del salto del Cinqueta, en Lafortunada, en octubre de 1949) comenzaron a aumentar las caídas y detenciones. una realidad con la que la población se vio obligada a vivir.

Todas estas caídas suponían el principio del fin, pues cada vez se oían menos cosas acerca de los maquis y llegó un momento, en 1952, en que



La central de Lafortunada sería objeto de una acción de sabotaje por parte del maquis

pareció que habían desaparecido. Una certeza que se confirmó en 1956 cuando un grupo de la Guardia Civil descubrió un zulo, en una de las muchas cuevas que los maquis ocuparon a lo largo de la Sierra Ferrera, lleno de armas y munición. La noticia entre la gente de la zona supuso diversas reacciones: para unos venía a ser el fin de su pesadilla más larga, la de los «rojos» que a cualquier hora de la noche podían aparecer y complicar su existencia. Para otros, sin embargo, se desvanecía la ilusión que todavía mantenían por recuperar la República.

Se fueron los maquis, pero su esencia permaneció más allá de los límites temporales de su estancia en Sobrarbe, pues la gente nunca olvidó la tensión y el miedo que les causó el encontrarse entre unas obligaciones civiles (pues todo el mundo tenía la orden de denunciar los movimientos que les resultasen sospechosos) y unas determinadas tendencias ideológicas (en los casos de aquellas personas que desde su limitado espacio vital decidieron colaborar con aquellos misteriosos personajes con armas llegados desde Francia). Entre unas cosas y otras, la tiempos después de la guerra, convertidos en una larga dictadura militar, fueron muy difíciles. Parecía que todo era mucho más complicado en las grandes ciudades, en consonancia al grado de intensidad que anteriormente habían tenido en ellas la rebelión militar y la revolución popular, que en zonas rurales como el Sobrarbe, un tanto al margen de las decisiones políticas del poder central. De hecho numerosas familias que durante los años 20 y 30 habían optado por el exilio económico en busca de las mayores posibilidades que ofertaban las capitales de provincia, ahora, cuando los recursos llegaban a los límites de la escasez y las cartillas de racionamiento controlaban los pocos alimentos que una familia podía llevarse diariamente a la boca, optaron por la vuelta al campo. Se refugiaron en la casa de algún hermano o algún primo que había permanecido en la zona y allí encontraron algunas ventajas en la alimentación, aún teniendo en cuenta que tampoco aquí los recursos abundaban. Y, sin embargo, en el Sobrarbe la dura posguerra, regida por el franquismo, también dejó su huella, especialmente en la memoria: gente que murió y gente que ya no regresó, archivos que se quemaron destruyendo una historia anterior al desastre bélico, obras de arte que solo conservan el recuerdo de las personas que las vieron en su sitio, pueblos abandonados a causa de la política hidráulica del caudillo y recuerdos encasillados en el rincón del olvido por miedo a recrear una época de pobreza, miedo y ansiedad.

La transición a la democracia y el inicio de una nueva era de libertades destapó una gran riqueza documental sobre la guerra y la posguerra de la zona, aunque su estudio todavía no haya sido extensamente realizado, a excepción de monográficos y publicaciones acerca de la Bolsa de Bielsa, investigaciones sobre los maquis y breves aportaciones de la guerra dentro de estudios de otros aspectos del Sobrarbe. Quizá ahondar en estos documentos suponga abrir antiguas cuestiones, pero todavía falta por abrir alguna página más de esta historia en la comarca sobrarbense.